

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE INTEGRAL
Modalidad Especial Análisis Capacidad Fiscal**

**MUNICIPIO DE PRADERA VALLE DEL CAUCA
Vigencia 2018**

**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
Santiago de Cali, diciembre de 2019**

HOJA DE PRESENTACIÓN

Contralor departamental del Valle del Cauca	José Ignacio Arango Bernal
Director operativo de control fiscal	Jaime De Jesús Portilla Rosero
Subdirector operativo financiero y patrimonial	Julio Cesar Hoyos Marín
Representante legal entidad auditada	Henry Devia prado
Equipo de auditoría:	Uriel Montoya García
	Yaneth Garcés Thorp
	Wilmar Ramirez Saldarriaga
	Edgar Orlando Ospina Ospina
	Rodrigo Hernán Montoya Troncoso
	Carlos Alberto Marín Becerra

TABLA DE CONTENIDO

1. HECHOS RELEVANTES	2
2. CARTA DE CONCLUSIONES	4
3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	6
3.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y ELEMENTOS DEL TRIBUTO	6
3.2. IMPUESTOS AUDITADOS	7
3.2.1. Impuesto Predial Unificado	7
3.2.2. Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros	12
3.2.3 Impuesto a la Sobretasa a la Gasolina	14
4. ANEXOS	16
4.1 CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS	16

1. HECHOS RELEVANTES

La capacidad fiscal de los Municipios y el Departamento puede ser diferente al recaudo de sus impuestos, al depender de las tarifas aplicadas, el esfuerzo fiscal, la capacidad económica de los contribuyentes que posee, la voluntad de los mismos para hacer los pagos oportunamente sin evasión ni elusión fiscal y del clima político existente en la jurisdicción correspondiente; las Administraciones deben adoptar mecanismos eficientes de recaudo, que evidencien el esfuerzo fiscal para explotar al máximo su capacidad.

En la función de fiscalización y correcta liquidación de los tributos, debe desarrollarse dentro de los parámetros del debido proceso y el respeto al derecho de defensa (contribuyentes impuestos) que debe asistir esa labor; aspectos que repercuten en la obtención de recursos para sostenimiento de los entes territoriales y consecución de los fines esenciales del Estado Social de Derecho.

Existen dos grandes modelos para pagar impuestos:

Declaración Privada: Es el pago espontaneo en cumplimiento de una norma (ley, ordenanza, acuerdo) que imponga el tributo y las condiciones de liquidación y pago (hecho generador, sujeto pasivo, tarifa, base gravable y plazos). En este caso, la administración debe suministrar formularios o papeles o medios electrónicos para facilitar el pago del tributo mediante la declaración privada de impuestos, primero se paga y luego la administración revisa la declaración mediante requerimientos y liquidaciones oficiales.

Modelo Coercitivo: El Estado envía un cobro a cada contribuyente, estipulando en el recibo o factura, según el caso, la liquidación y el plazo para el pago, en este modelo el contribuyente espera que la administración le exija el pago ahí sí, oponerse a la liquidación, cuyo cobro directo del impuesto debe estar precedido de un acto previo, que otorgue al contribuyente la oportunidad de controvertir la norma aplicada al caso, la calidad de sujeto pasivo o los factores de cuantificación del tributo (derecho a la defensa).

El Sistema Tributario Colombiano se ha caracterizado por ser uno de los más Fluctuantes de Latinoamérica, debido a las constantes reformas realizadas por el legislador en materia tributaria con beneplácito del Gobierno Central, es por eso que en temas tributarios es conveniente que los municipios estén atentos a todos los cambios que se realizan en esta materia, debido que estos inciden directamente en sus finanzas públicas.

La descentralización fiscal por su parte en Colombia, presenta un esquema intermedio entre centralizado y descentralizado, porque el Gobierno Central legisla y recauda la mayor parte de los impuestos, que luego distribuye en un alto porcentaje a los Departamentos y Municipios, mediante un sistema de transferencias condicionadas a destinaciones específicas llamado Sistema General de Participaciones “S.G.P” atendiendo las metas del Gobierno Central para la prestación de los bienes y servicios, buscando compensar las diferencias

en la capacidad fiscal de las entidades territoriales, quienes también por mandato constitucional recaudan y gastan sus propios ingresos.

El recaudo tributario territorial coincide con la concentración de la actividad económica, de allí que los Departamentos con mayor recaudo son Cundinamarca (Bogotá), Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico. Debiéndose establecer reglas claras para compensar las entidades territoriales, lograr equidad y equilibrar las diferencias de la capacidad fiscal.

Persiste la autonomía de los Municipios, en lo atinente al establecimiento del régimen sustantivo sancionatorio aplicable a los impuestos que rijan en su respectiva jurisdicción, aspecto diferente es que, para una mejor administración de los tributos, las entidades territoriales procuren ajustar su normatividad interna a las previsiones de la ley, con la finalidad de manejar en cada jurisdicción una única normatividad que les permita unificar el procedimiento para todos los contribuyentes.

Las administraciones municipales, no vienen adelantando procesos de fiscalización e investigación tributaria, lo que no permite tener certeza sobre los valores cancelados por los contribuyentes, generando presuntamente elusión y evasión de los tributos

En el impuesto de industria y comercio, no se cuenta con una base de datos depurada y actualizada, se tienen registros de los establecimientos públicos que funcionan en los municipios, no se conoce de los contribuyentes, que sin tener establecimiento alguno, deben pagar el impuesto, por efectos de la territorialidad, el sólo hecho de llevar a cabo la operación gravada en predios del territorio, ya lo convierte en responsable, situación que ocasiona presuntamente evasión del impuesto.

2. CARTA DE CONCLUSIONES

Santiago de Cali,

Doctor:

HENRY DEVIA PRADO

Alcalde Municipal

Pradera - Valle del Cauca

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política y en cumplimiento del PGA 2019, practicó auditoría con enfoque integral modalidad especial Análisis Capacidad Fiscal del **municipio de Pradera** Valle del Cauca, a través de la evaluación de los principios de, eficiencia y eficacia con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el proceso examinado. La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. La responsabilidad de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca consiste en producir un informe integral que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría (NIAS) y con políticas y procedimientos de auditoría con enfoque integral prescritos por la Contraloría Departamental del Valle, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de las evidencias y documentos que soportan el proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la subdirección operativa financiera y patrimonial.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance:

Se evaluó el componente de control de ejecución presupuestal de ingresos en los factores de Impuesto Predial Unificado, Impuesto de Industria y Comercio, Impuesto a la Sobretasa a la Gasolina, impuesto vehículos automotores, registro, consumo de cerveza, sifones y refajos.

En el trabajo de auditoria no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance de nuestra auditoria.

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas y se incorporó en el informe, lo que se encontró debidamente soportado.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión del Análisis Capacidad Fiscal, **no cumple** con los principios evaluados (eficiencia, eficacia), como consecuencia de los siguientes hechos:

RELACIÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoría al cierre fiscal de la vigencia 2018, se determinaron ocho (8) hallazgos administrativos, tres con connotación disciplinaria y uno fiscal.

PLAN DE MEJORAMIENTO

La entidad debe ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra desarrollando, con acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El plan de mejoramiento se debe registrar en el proceso de plan de mejoramiento del Sistema de Rendición de Cuentas en Línea RCL, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Resolución Reglamentaria No. 01 de enero 22 de 2016.

Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo.



C: 1003

JOSÉ IGNACIO ARANGO BERNAL
Contralor Departamental del Valle del Cauca

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

En cumplimiento del PGA 2019, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca adelantó auditoría especial Análisis de la Capacidad Fiscal de los municipios sujetos de control, vigencia 2018, en lo correspondiente a la, administración, fiscalización, liquidación, discusión de recursos y función de cobro administrativo coactivo, de los tres (3) principales tributos del municipio (predial y complementario, industria y comercio, sobretasa a la gasolina), generadores de los ingresos corrientes, con los cuales se apalancan los gastos de funcionamiento, y la inversión con recursos propios del municipio

3.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CONCEPTO	APROBADO 2016	EJECUTADO 2016	% EJECUCION 2016	APROBADO 2017	EJECUTADO 2017	% EJECUCION 2017	% INCREMENTO 2016 - 2017	APROBADO 2018	EJECUTADO 2018	% EJECUCION 2018	% INCREMENTO 2017 - 2018	TOTAL	% PARTIC. EJECUCION
IMPUESTO PREDIAL	4.261.605.041	4.358.089.448	2	4.043.490.887	4.325.407.933	7	1	4.076.000.000	4.275.198.646	5	1	21.078.186.922	47
INDUSTRIA Y COMERCIO	3.058.355.000	3.071.075.569	0	3.953.912.354	3.928.282.900	1	28	3.938.485.753	3.498.617.523	11	11	18.390.374.127	41
AVISOS Y TABLEROS	100.500.000	73.764.751	27	74.000.000	87.788.558	19	19	91.000.000	94.878.011	4	8	421.431.331	1
SOBRETASA GASOLINA	1.002.610.708	1.072.926.510	7	988.690.529	988.690.529	-	8	1.037.089.933	1.020.151.933	2	3	5.107.549.433	11
TOTALES	8.423.070.749	8.575.856.278	2	9.060.093.770	9.330.169.920	3	9	9.142.575.686	8.888.846.113	3	5	44.997.541.781	100

Fuente: Secretaria de hacienda

Para la vigencia 2018, la entidad proyectó un presupuesto de ingresos de predial, industria y comercio y sobretasa a la gasolina de \$9.142 millones, de los cuales se recaudaron el 95% o sea se dejaron de recaudar \$254 millones, esto se presenta porque los ingresos de predial e industria y comercio estuvieron por debajo de lo aprobado.

Cabe destacar que para la vigencia 2018 el recaudo de Industria y comercio se ejecutó el 3% menos de lo aprobado.

El impuesto más importante para el municipio como lo es el predial ha tenido un comportamiento regular, pues presento disminución del 1% entre los años 2016 y 2017, entre el 2017 y el 2018 presento igualmente disminución del 1%.

Como se observa en el cuadro de referencia, la proyecciones de los tres (3) principales tributos del municipio, se realizan sobre base lineales y constantes, dependiendo del comportamiento del recaudo del tributo en las ultimas vigencias, no se tienen en cuenta diferentes variables que impactan en la proyección y recaudo, como son; el comportamiento de la economía, base de datos depurados, cruce de información con terceros, procesos de fiscalización, determinación de omisos, beneficios en la vigencia para morosos, procesos de cobros coactivos, por esta razón se presentan comportamientos irregulares en la proyección y recaudos, lo cual muestra, la no realización de estudios y análisis minuciosos de cada uno de los tributos, que soportan los ingresos propios del municipio.

3.2. IMPUESTOS AUDITADOS

Los tributos Auditados para el municipio de Pradera son los siguientes:

1. Impuesto de Predial Unificado.
2. Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros.
3. Sobretasa a la gasolina.

CARACTERISTICAS DE ESTOS TRIBUTOS:

1. Todos tiene creación legal.
2. Su fuente es la voluntad unilateral del Estado.
3. Constituyen un vínculo personal entre el Estado y los sujetos obligados al pago.
4. La prestación es de carácter pecuniario.
5. Están destinados al cumplimiento de los fines inherentes al Estado.
6. Existen tres tipos de tributos: Impuestos, Multas y Contribuciones.

3.2.1. Impuesto Predial Unificado

La Ley 14 de 1983 estableció normas sobre la formación, actualización y conservación catastral. El avalúo catastral se define como la determinación del valor de los predios, obtenida mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario (Decreto 3496 de 1983). La Resolución 2555 de 1988, del IGAC, reglamentó tales aspectos fijó elementos para determinar la pertenencia de un predio a un municipio determinado.

La Ley 44 de 1990 grava la propiedad o posesión de un inmueble en áreas urbanas, rurales o suburbanas, cuya base gravable es el avalúo catastral o el autoavalúo de tales bienes, ajustado anualmente (1° de enero) conforme a la regulación prevista en dicha ley (art. 8°). Esta ley autorizó a los concejos municipales para fijar la tarifa entre el 1 y el 16 por mil del respectivo avalúo de manera diferencial y progresiva, teniendo en cuenta: i) Los estratos socioeconómicos, ii) los usos del suelo en el sector urbano, y iii) la antigüedad de la formación o actualización catastral¹⁰³. Dispuso respecto de las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados, que podían ser superiores a ese límite, sin que excedieran el 33 por mil.

Procedimiento especial en el impuesto predial, El artículo 354 de la Ley 1819 de 2016 dispone que sin perjuicio de la utilización del sistema de declaración, para la determinación oficial del impuesto predial unificado, las entidades territoriales podrán establecer sistemas de facturación que constituyan determinación oficial del tributo y presten mérito ejecutivo, establece su contenido, el trámite para ponerla en

conocimiento del contribuyente y el trámite que este debe seguir en caso de desacuerdo con el valor cobrado.

EXENCIONES

ARTÍCULO 41. PREDIOS EXCLUIDOS Frente a los siguientes predios no se genera la obligación de pagar impuesto predial:

1. Los predios de propiedad del Municipio de Pradera, en donde funcionen centros de salud y centros educativos de carácter oficial, educación preescolar, básica primaria, básica secundaria, media vocacional, intermedia profesional. y Juntas de Acción Comunal.
2. Los inmuebles de propiedad del Municipio de Pradera destinados a cumplir las funciones propias de la creación de cada dependencia, a la conservación de hoyas hidrográficas, canales y conducción de aguas, embalses, colectores de alcantarillado, tanques, plantas de purificación, servidumbres activas, vías de uso público.
3. Los bienes de uso público y obra de infraestructura, excepto las áreas ocupadas por establecimientos mercantiles.
4. Los predios que se encuentren definidos legalmente como parques naturales o como parques públicos de propiedad de entidades estatales, conforme al artículo 137 de la Ley 488 de 1998, así como los que correspondan a zonas verdes o zonas de cesión debidamente registrados en el inventario catastral.
5. Los predios propiedad de las iglesias que sean destinados al culto a la vivienda de las comunidades religiosas y las casas cúrales y casas pastorales. Los demás predios o áreas con destinación diferente serán gravados con el Impuesto Predial Unificado.

ARTÍCULO 42. PREDIOS EXENTOS Son predios exentos del impuesto predial:

1. Los predios que deban recibir tratamiento de exentos en virtud de tratados internacionales.
2. Los inmuebles declarados patrimonio histórico o arquitectónico por la entidad competente. La Secretaría de Hacienda decidirá el reconocimiento de la exención del Impuesto Predial Unificado mediante resolución, una vez el propietario suscriba un convenio con la Secretaría de Planeación e Infraestructura quien hará la correspondiente interventoría. El contribuyente por su parte se comprometerá a ejecutar la restauración, consolidación, recuperación, conservación y mantenimiento acorde con el nivel de conservación del bien inmueble correspondiente al patrimonio histórico o arquitectónico del municipio, y se abstendrá de realizar intervenciones no admisibles por el respectivo nivel de conservación. La Secretaría de Planeación e Infraestructura, informará a la Secretaría de Hacienda el incumplimiento de las anteriores obligaciones. En tal evento se revocará el beneficio mediante acto administrativo.
3. Predios rurales para incentivar la conservación y recuperación de Bosques protectores del recurso agua en la red hídrica municipal (Cuenca Hidrográfica Río Bolo y sus afluentes, 13 Cuenca Hidrográfica Quebrada Vilela y Flores Amarilla y Cuenca Hidrográfica Río Parraga y sus afluentes)

PARÁGRAFO PRIMERO. Los propietarios de predios rurales ubicados en las áreas protectoras del recurso agua, detalladas en el numeral 3 tendrán una exoneración del 95% del pago del Impuesto Predial Unificado.

Actualización catastral

Uno de los mecanismos con los que cuentan los municipios para aumentar el recaudo del impuesto predial es la actualización catastral, la cual consiste en la

renovación del censo o inventario de los predios públicos y privados de un municipio donde se registran los cambios en la información jurídica (propietarios y/o tenedores), física (cambio de área, anexos, conservación) y económica (avalúo catastral) de los predios.

Políticas de Fiscalización

La fiscalización como herramienta de determinación se puede definir como el conjunto de tareas, acciones y medidas de la administración, tendientes a compeler al contribuyente al cumplimiento íntegro, cabal y oportuno de sus obligaciones tributarias, ya sean ellas sustanciales como el pago de la obligación, o simplemente formales, como la inscripción en el registro de contribuyentes.

1. Hallazgo administrativo

El municipio de Pradera no cuenta con unas políticas de gestión tributaria que le permita la inscripción de los predios totales del municipio, e igualmente lograr la potencialidad en el recaudo, los predios que se encuentran al día son los mismos que vienen pagando el tributo.

Para la inscripción de nuevos predios, todo se hace de acuerdo al reporte del IGAC, el municipio unilateralmente no puede realizar modificación al censo catastral. Con lo anterior se denota debilidad en el municipio para la aplicación del artículo 684 de Estatuto tributario nacional, lo anterior se ocasiona por la falta de programas de fiscalización efectivas que establezcan los parámetros para el registro y cobro del impuesto. Ocasionando que el municipio deje de percibir recursos potenciales, para el cumplimiento de la inversión social con recursos propios y pago de gastos de funcionamiento.

Prescripciones

En las vigencias 2016 – 2018 se dieron prescripciones por \$1.496.124.937 así:

2016	\$462.413.459
2017	\$468.149.406
2018	\$565.562.072.
Total	\$1.496.124.937.

La administración en su derecho de contradicción, deberá presentar con claridad cuáles fueron los valores prescriptos en las vigencias 2011 – 2012 y 2013.

2. Hallazgo administrativo, disciplinario y fiscal.

Se acepta el argumento de la entidad en el sentido de que se tendrá en cuenta el valor aportado por la administración de las prescripciones que se dieron en la vigencia 2018 por \$81.894.221 de todas maneras las prescripciones se originaron en que la administración municipal como autoridad tributaria no adelanto la gestión de cobro (proceso administrativo coactivo) en los cinco años siguientes de causado el impuesto (título ejecutoriado). En razón de todo lo anterior la observación queda en firme en todas sus connotaciones, como un hallazgo administrativo, disciplinario y fiscal, quedando el hallazgo en los siguientes términos:

La administración municipal de Pradera en la vigencia 2018, concedió prescripciones por deudas del impuesto predial por \$81.894.221 millones, en vigencias que abarcan desde el primer trimestre de 2013, 2012 y 2011, al no adelantar la gestión de cobro (proceso administrativo coactivo) en los cinco años siguientes de la causación del impuesto (título ejecutoriado), incumpliendo presuntamente los Artículos; 817 estatuto tributario nacional, 417 estatuto tributario municipal (acuerdo 016 de 2012), 2 literal a y e de la Ley 87 de 1993, 53 de la Ley 739 de 2014, 1 y 5 de la Ley 1066 de 2006, y Decreto 100-023-07 de febrero de 2007 (reglamento interno del recaudo de cartera del municipio), Situación ocasionada presuntamente por ausencia de mecanismos de seguimiento y control que no permitieron determinar de manera oportuna, los contribuyentes del impuesto predial que no venían cumpliendo con el respectivo pago del tributo, generando incertidumbre frente a la situación financiera de municipio, que puede afectar la toma de decisiones, y el cumplimiento de los proyectos financiados con recursos propios y el pago de los gastos de funcionamiento. Se configura una presunta falta disciplinaria de conformidad con el numeral 1 del artículo 34 y 50 de la Ley 734 de 2000, y un presunto detrimento patrimonial por cuantía de \$81 millones, de conformidad con el art. 4 y 5 de la Ley 610 de 2000.

Se requiere que la administración municipal en su derecho a la contradicción determine el valor real de las prescripciones dadas en la vigencia 2018 que cobijen las vigencias 2013, 2012 y 2011. En auditoria regular se dejó hallazgo administrativo y disciplinario por las prescripciones dadas en las vigencias 2017 y 2018.

Cartera

El municipio de Pradera según la información aportada registra una cartera por cobro de impuesto predial a 31 de diciembre de 2018 por 1.335 millones. La cartera del año 2013 hacia atrás asciende a \$1.059 millones.

Cabe resaltar que el municipio registra cartera por cobrar corresponde a predios que fueron objeto de extinción de dominio, la Sociedad de Activos Especiales “SAE” argumenta que, para el pago del impuesto de estos predios, los mismos deben generar los recursos para su pago, pero se aduce que los mismos están improductivos, o sea el municipio tiene dificultad para cobrar esta cartera

CARTERA PREDIAL MUNICIPIO PRADERA						
CONCEPTO	VALOR TOTAL	HASTA 1 AÑO	HASTA 2 AÑOS	HASTA 3 AÑOS	HASTA 4 AÑOS	MAS DE 4 AÑOS
PREDIAL	1.335.272.661	160.346.820	66.260.951	36.783.787	12.788.462	1.059.092.641

Fuente: Secretaria de hacienda

3. Hallazgo administrativo y disciplinario

La administración municipal a diciembre 31 de 2018 consolidó cartera del impuesto predial por \$1.335 millones, de la cual \$1.059 millones, tienen edades superiores a cuatro (4) años, según información rendida en la plataforma Chip por la administración municipal, se evidencio que la cartera por cobrar de impuesto predial unificado asciende a \$19.779, la entidad presuntamente no ha adelantado la gestión de cobro correspondiente para el recaudo de estos tributos, incumpliendo los Artículos 2 literal a y e de la Ley 87 de 1993, 1 y 5 de la Ley 1066 de 2006, Decreto 100-023-07 de febrero de 2007 (reglamento interno del recaudo de cartera del municipio), situación ocasionada presuntamente por ausencia de mecanismos de seguimiento y control que no permiten determinar de manera oportuna, los contribuyentes del impuesto predial que no venían cumpliendo con el respectivo pago del tributo, generando incertidumbre frente a la situación financiera de municipio, que puede afectar la toma de decisiones, y el cumplimiento de los proyectos financiados con recursos propios y el pago de los gastos de funcionamiento. Se configura una presunta falta disciplinaria de conformidad con el numeral 1 del artículo 34 y 50 de la Ley 734 de 2000.

Procesos de cobro

IMPUESTO PREDIAL				
ESTADO DE LOS PROCESOS DE COBRO 2018				
ESTADO	CANTIDAD	VALOR	% PROCESOS	% VALORES
Cobro persuasivo	319	\$ 4.986.305.330	78	94
Acuerdos de pago	53	\$ 164.719.375	13	3
Título ejecutivo	39	\$ 129.222.902	9	2
Mandamiento de pago			0	0
Secuestrados	0	\$ -	0	0
Terminación del proceso			0	0
TOTAL	411	\$ 5.280.247.607	100	100

El municipio de Pradera, como se evidencia en el cuadro anterior en la vigencia 2018 ha iniciado 411 procesos de cobro del impuesto predial, donde el 78% corresponde a cobros persuasivos, 13% a acuerdos de pago y 9 a títulos ejecutivos. En lo aportado no se informa sobre los procesos terminados.

4. Hallazgo administrativo y disciplinario

El municipio de Pradera como se evidencia en el cuadro anterior según la información reportada correspondiente a la vigencia 2018 ha iniciado 411 procesos de cobro del impuesto predial, donde el 78% corresponde a cobros persuasivos, 13% a acuerdos de pago y 9% a títulos ejecutivos. En lo aportado no se informa sobre los procesos terminados de una deuda por cobrar de \$5.280 millones, teniendo en cuenta la cartera por cobrar informada en el CHIP (\$19.779 millones), se denota poca efectividad en los procesos de cobro, en términos generales se ha adoptado una política más de conciliación de persuasión, pues al 54% se le inicio proceso de cobro persuasivo. Los expedientes presuntamente no cuentan con el impulso suficiente para cobrar el impuesto de predial y complementario, a través de esta vía, persistiendo el riesgo de prescripción de cobro de la acción coactiva. Incumpliendo el artículo 818 del estatuto tributario nacional. Situación ocasionada presuntamente por ausencia de mecanismos de seguimiento y control que no permiten determinar de manera oportuna, los términos manejados en el proceso de cobro coactivo, generando incertidumbre frente a la situación financiera de municipio, toda vez, que estos recursos puede convertirse en irrecuperables. Se configura una presunta falta disciplinaria de conformidad con el numeral 1 del artículo 34 y 50 de la Ley 734 de 2000.

3.2.2. Impuesto de Industria y Comercio

La Ley 14 de 1983, por la cual se fortalecieron los fiscos de las entidades territoriales, dispuso en el artículo 32 que ese impuesto recae sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que se realicen en un municipio, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos.

Las actividades económicas han sido clasificadas como primarias, secundarias y terciarias. A las primeras pertenecen, principalmente, las labores de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, caracterizadas por ser tareas en las que los productos se toman directamente de la naturaleza, no incluyen trabajos de transformación, alteración, modificación de las condiciones físicas y químicas de la materia, pues estos hacen parte de la rama secundaria, que se encarga de la manufactura de bienes, su explotación, construcción.

El artículo 33, modificados por la Ley 1819 de 2016, dispone que la base gravable está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresamente excluidos en este artículo.

Forman parte de la base gravable todos los ingresos que no estén expresamente excluidos, y según lo dispuesto en los artículos 32 a 48 de la Ley 14 de 1983, los ingresos no gravados con el ICA (operacionales o no operacionales para la empresa) son los originados en (art. 39 Ley 14 de 1983):

- La venta de activos fijos.
- La venta de bienes o servicios exportados.
- Las ventas primarias¹⁵² de productos agrícolas, ganaderos y avícolas.
- La explotación de canteras y minas, diferentes de las de sal, de esmeraldas y de metales preciosos, siempre que las regalías o participaciones para el municipio sean iguales o superiores a lo que correspondería pagar por concepto del ICA.
- La prestación de servicios por establecimientos educativos públicos, las entidades de beneficencia, las culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, los partidos políticos y los hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud.

5. Hallazgo administrativo

La administración municipal en la vigencia de 2018 recaudo el impuesto de industria y comercio, a través de declaración privada presentada por contribuyente, en los términos establecidos por el estatuto tributario municipal, la base del impuesto son los ingresos brutos de la vigencia, los cuales por efectos de la territorialidad son objeto de deducciones (pago del impuesto en otro municipio), con lo cual se depura la base, y se establecen los ingresos netos, sobre los cuales se aplica la tarifa, y el monto a pagar por este concepto, las deducciones son considerables y no se le realiza ningún tipo de control, seguimiento, verificación, investigación, con fin de tener certeza sobre el valor del cual se cancela el impuesto. Aplicando en forma inadecuada el artículo 684 del estatuto tributario nacional y el estatuto tributario municipal (acuerdo No. 027 de 2015). Situación ocasionada presuntamente por debilidad en los procesos de fiscalización e investigación tributaria, que no permite la certeza de los valores que se vienen deduciendo y cancelando por este impuesto, generando incertidumbre frente a la situación financiera de municipio, toda vez que se puede presentar un presunto detrimento patrimonial.

3.2.3 Impuesto a la Sobretasa a la Gasolina

Regulada por la ley 488 de 1998 artículos 177 al 130; Ley 681 de agosto de 2001, reglamentada por decreto 2653 de diciembre de 1998, Ley 788/2002, Ley 1430y demás normas que la reglamenten; los responsables mayoristas cumplirán mensualmente con la obligación de declarar y pagar la sobretasa, en las entidades financieras autorizadas para tal fin, dentro de los dieciocho (18) primeros días calendarios del mes siguiente a la causación. Los distribuidores minoristas deberán cancelar la sobretasa a la gasolina motor corriente o extra y al ACPM al responsable mayorista, dentro de los siete (7) primeros días calendarios del mes siguiente al de la causación

Hecho Generador: está constituido por el consumo de gasolina motor extra y corriente nacional o importada en la jurisdicción de cada municipio, distrito y departamento.

Responsables: los distribuidores mayoristas de gasolina motor extra y corriente y del ACPM, los productores e importadores, además, son responsables directos del impuesto los transportadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de la gasolina que transporten o expendan.

Causación: la sobretasa se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador enajena la gasolina motor extra y corriente o ACPM, al distribuidor minorista o consumidor final.

Igualmente se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador retira el bien para su propio consumo.

Base Gravable: está constituida por el valor de la referencia de venta al público de la gasolina motor tanto extra como corriente y el ACPM, por galón, que certifique mensualmente el ministerio de Minas Y energía.

Tarifa: corresponde al 18.5% de la base gravable (valor gasolina vendida (menos) porcentaje de alcohol carburante

SOBRETASA GASOLINA	BIOMAX			PETROMIL			TERPEL			ZEUSS PETROLEUM		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
MES												
ENERO	4.222.000	3.504.000	5.048.000	17.690.000	12.498.000	16.986.000	23.555.000	20.128.000	27.507.000	23.544.000	19.366.000	22.768.000
FEBRERO	4.089.000	3.185.000	5.135.000	17.340.000	11.185.000	18.265.000	23.114.000	17.950.000	24.240.000	19.449.000	15.480.000	24.631.000
MARZO	3.544.000	6.718.000	5.285.000	17.323.000	18.547.000	18.509.000	25.236.000	28.180.000	31.839.000	20.400.000	26.363.000	27.740.000
ABRIL	3.933.000	4.858.000	5.361.000	16.692.000	16.622.000	15.699.000	23.140.000	27.273.000	28.284.000	23.425.000	22.742.000	20.734.000
MAYO	3.631.000	4.500.000	5.201.000	19.518.000	17.068.000	17.216.000	25.630.000	26.174.000	28.129.000	21.091.000	27.203.000	24.096.000
JUNIO	3.976.000	4.970.000	6.934.000	15.594.000	18.261.000	18.151.000	25.236.000	29.822.000	28.911.000	20.914.000	23.142.000	23.969.000
JULIO	2.420.000	6.088.000	6.148.000	18.576.000	17.378.000	17.868.000	23.361.000	27.785.000	29.262.000	27.661.000	24.364.000	23.154.000
AGOSTO	5.186.000	4.754.000	6.148.000	18.032.000	17.958.000	18.802.000	30.383.000	30.282.000	32.629.000	24.406.000	25.803.000	23.452.000
SEPTIEMBRE	4.322.000	5.702.000	6.013.000	17.565.000	17.876.000	19.119.000	25.690.000	26.190.000	26.646.000	23.188.000	21.342.000	23.143.000
OCTUBRE	3.458.000	4.512.000	5.708.000	17.461.000	15.568.000	19.931.000	29.174.000	29.577.000	35.250.000	24.644.000	28.162.000	26.087.000
NOVIEMBRE	4.792.000	5.230.000	5.319.000	18.161.000	18.519.000	19.119.000	23.491.000	28.233.000	25.146.000	23.085.000	22.328.000	10.435.000
DICIEMBRE	3.091.000	5.550.000		21.197.000	18.844.000		32.600.000	33.537.000		24.995.000	27.596.000	

6. Hallazgo administrativo

Los contribuyentes que pagan el impuesto de Sobretasa a la Gasolina, son las empresas Biomax, Petromil, Terpel S.A y Zeuss Petroleum, la base para el cobro del impuesto, es la venta de gasolina que realiza a cuatro (4) estaciones de servicio “EDS” que funcionan en el municipio, el tributo se cancela, a través, de declaración privada en forma mensual, la administración no realiza ningún tipo de control, seguimiento, verificación, investigación, visita, cruce de información con las con las Estaciones de Servicios (EDS) de la jurisdicción del municipio, sobre el valor, que sirve de base para la liquidación y pago del impuesto del impuesto.

Aplicando en forma deficiente el artículo 684 del estatuto tributario nacional y el estatuto tributario municipal, “el cual establece que la Administración tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales”. Situación ocasionada presuntamente por ausencia de procesos de fiscalización e investigación tributaria. Que no permite la certeza de los valores que se vienen cancelando por este impuesto, generando incertidumbre frente a la situación financiera de municipio, toda vez, que se puede presentar presuntamente elusión o evasión del impuesto.

4. ANEXOS

4.1 CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES INFORME DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL Modalidad Especial Análisis Capacidad Fiscal Vigencia 2018						
No. Hallazgo	Administrativos	Disciplinarios	Penales	Fiscales	Sancionatorio	Daño Patrimonial (\$)
6	6	3		1		\$81.894.221